

Un acueducto tan discutido como blindado por la ley

El trasvase Tajo-Segura que quiere anular Castilla-La Mancha para revertir sus caudales en sus provincias se sostiene sobre sólidos pilares jurídicos y económicos desde 1979

ANDRÉS VALDÉS | 24.08.2015 | 01:10

El **trasvase Tajo-Segura**, concebido en plena República, aprobado por Franco, inaugurado en democracia, secuestrado por el PP en los años hidrológicos de Aznar y amenazado de muerte por la izquierda desde entonces se ha apoderado de la prensa de agosto. De un lado, por culpa de la sequía declarada hace unas semanas [en la cuenca a la que vierte una media de 300 hectómetros cúbicos \(hm³\) cada año](#), el Segura; de otro, la situación de alerta (sólo) en la cabecera de río Tajo, con **los embalses de Entrepeñas y Buendía**, al 16% de su capacidad conjunta. Desde arriba, y con tanta o más importancia que la situación de escasez hídrica, el agravante de estar en un año electoral con cambio en tres de las cinco autonomías que en mayor o menor medida beben del río y ante una cita decisiva en noviembre que puede afectar al gobierno del Estado, único propietario legítimo en territorio español de los caudales del río en disputa. Abajo, los intereses de la población y de los regantes y los informes técnicos, escuchados o ignorados en función del momento político.

Apagado el ruido de la actualidad, la foto histórica muestra dos regiones conectadas por **un acueducto de 290 kilómetros** que representaba la solidaridad territorial en dos fases: el trasvase hasta el embalse de Talave en Albacete y el llamado postravase que vierte en Murcia. En **la sierra de Guadalajara** se estimó que los caudales que traía el curso alto del Tajo serían suficientes no sólo como para acumular recursos destinados al tramo medio y bajo del río, sino también para derivar los excedentes hacia Murcia y Alicante y [compensar en parte el «desequilibrio hidráulico peninsular»](#). Este criterio fue compartido por diversos equipos técnicos de distintos partidos e incluso regímenes políticos.

En 1979 las obras estaban terminadas y un real decreto ya regulaba sus criterios de explotación, como explica **Andrés Molina, jurista del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante**. Durante 18 años, el acueducto funcionó con relativa tranquilidad entre los territorios pese a tener lagunas importantes en cuanto a la definición de los límites por debajo de los cuales no cabía trasvase para poder aportar unos mínimos a la cuenca cedente y, por tanto, prioritaria. En 1998 se fijó Por real decreto se fijó en 1998 en 240 hm³.

Antitrasvasismo

En aquel momento, el boom urbanístico se alternaba titulares con un **Plan Hidrológico Nacional (PHN)**,



Un agricultor cruza frente al sifón del trasvase a la altura de Orihuela. **TONY SEVILLA**

[Presa del pantano de Buendía, que en la actualidad acumula 247 hectómetros cúbicos.](#)

[Imagen del inicio de los tubos del trasvase Tajo-Segura, en Almonacid de Zorita \(Guadalajara\).](#)

[Fotos de la noticia](#)

Las cifras

110.000 EMPLEOS

Puestos directos e indirectos

Los investigadores del Instituto del Agua de la UA estiman que el trasvase genera 62.000 trabajos directos y más de 40.000 asociados.

400 MILLONES

Coste sufragado por los usuarios

Desde 1979, regantes y usuarios del trasvase han pagado más de 400 millones de euros a las regiones cedentes por el agua y por las obras.

21.000 MILLONES

Reclamaciones por supresión

Los regantes podrían reclamar esta cantidad al Estado si lo cierra.

que preveía un macrotrasvase desde el Ebro a las cuencas del **Júcar, Segura y Sur**. La oposición del PSOE y su apuesta, incompatible con la faraónica conducción por la desalinización contribuirían a marcar psicológicamente los trasvases como una opción de derechas -con las grandes constructoras ansiando sus contratos- mientras que el bando contrario se escudaba en su impacto medioambiental y en el infradesarrollo de las cuencas de interior -especialmente en la cabecera de los embalses y el transcurso medio del río- para ponerlos en cuestión. La tensión territorial, especialmente entre **Aragón y el Levante** era inédita en la historia reciente. El debate sobre cómo priorizar los usos del agua, un bien nacional, se llamó Guerra del Agua.

Mientras tanto, por **el trasvase descendían alrededor de 400 hm³**, la mayor parte de ellos para regar en los florecientes cultivos de Murcia, Alicante y en menor medida en Almería, y 150 hm³ para dar de beber al 96% de la población murciana y a más de la mitad de los alicantinos. El vuelco electoral de 2004 inauguraba la etapa de mayor inestabilidad de esta infraestructura.

Con los populares fuera del Gobierno, se echaba a andar la herramienta del PSOE para acabar con las guerras hídricas. El **programa AGUA** provocó la modificación del PHN y la sustitución del trasvase del Ebro por las desalinizadoras, que iban a producir en el arco mediterráneo una cantidad de agua dulce sacada del mar equivalente a la que se iba a extraer de la desembocadura del Ebro. En 2005, la llamada «clausula Narbona» modifica por real decreto los términos del trasvase del Tajo al Segura, que vivirá tiempos de acoso. Como relatan Melgarejo y Molina, esta reforma significaba que «conforme se fueran poniendo en funcionamiento las desalinizadoras se irían reduciendo los caudales trasvasables». Esta posición, derogada de nuevo con el posterior cambio de Gobierno, es la que vuelve a sostener hoy pero sin capacidad legislativa el PSOE tras recuperar la Junta de Castilla-La Mancha.

En 2009, el proyecto de redacción de [un nuevo estatuto de autonomía en Castilla La Mancha](#) impulsado por Barreda menciona directamente la intención de clausurar el acueducto. El proyecto no es sólo político: los usuarios de la cuenca del Tajo, desde regantes y propietarios hasta ciudadanos, demandaron durante el proyecto participativo previo a la redacción del **nuevo Plan de Cuenca del Tajo** que se aumentara el caudal natural del río con fines medioambientales en diferentes puntos de su curso medio. Que hubiera más caudal en Aranjuez. Toledo y Talavera hacía inviable, según los expertos de la UA, que se respetaran los caudales del trasvase en los embalses de cabecera.

Memorándum y «pax»

Ninguna de las dos iniciativas avanzó lo suficiente como para amenazar el acueducto, blindado dentro del PHN, pero hizo visibles las amenazas y los argumentos de una parte de la población manchega que quiere aumentar el trazado del río a costa de las transferencias al sureste.

En 2013 España es azul popular, las desalinizadoras que construyó el PSOE no funcionan pese a estar construidas y se aprovecha la sintonía ideológica para firmar un pacto entre comunidades que, se anuncia, es «histórico» según el presidente del Consell entonces, **Alberto Fabra**, porque pone fin a la guerra del agua. Numerosas cabeceras de prensa del Levante, incluida esta, titulan que «el trasvase se salva» cuando los presidentes de las cinco comunidades autónomas afectas por el río o su trasvase al Segura firman una memoria legal en la que se pactan enmiendas o modificaciones a las numerosas leyes que regulan el trasvase Tajo-Segura. Estos acuerdos se incluyen en los textos legales entre ese año y 2014.

En líneas gruesas, las adendas del memorándum se tradujeron en una práctica inviolabilidad de los derechos de los regantes y ciudadanos al otro lado del trasvase a recibir sus caudales, con **un tope de 600 hm³ al año**, siempre que los embalses se encontraran en los niveles altos de reserva. Por la parte manchega, el mínimo por el que se aseguraba que no bajaría ni una gota de agua hacia el sur se **elevaba desde los 240 hm³ iniciales hasta 400**. Desde aquí arranca el debate actual.

Para muchos expertos, como Molina, la cobertura legal y la legitimidad acumulada que tiene el trasvase Tajo-Segura es de tal magnitud que no sólo lo convierte en un asunto de Estado, sino que vuelve estéril cualquier debate que trascienda el ámbito legal, en referencia a las **reclamaciones de Castilla-La Mancha** apenas dos años después de que sus representantes sellaran el acuerdo. «En el trasvase tenemos un marco legal que está por encima de interpretaciones políticas», apunta el jurista.

De momento, la actividad legal antitrasvasista se concentra en atacar el tramo de acuerdo más abierto. Según **la ley de Evaluación Ambiental de 2013 y el real decreto de 2014** por los que quedan definidas las reglas de explotación y los niveles de agua que determinan las operaciones en el sistema Entrepeñas y Buendía, con más de 1.300 hm³ embalsados pueden traspasarse hasta 60 hm³ al mes por el acueducto. Es el llamado nivel 1. En el 2, se limita el caudal a 38 hm³ si **los embalses están entre 1.300 y 600 hm³**. En el nivel 3, activado cuando las reservas se hallen entre 600 y 400 hm³, invoca la intervención del ministro de Medio Ambiente, máxima figura del ministerio del que dependen no sólo todas las cuencas hidrográficas sino también la **Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura**. En la actualidad, es la ministra Tejerina quien decide si se trasvasa agua y en qué cantidad, hecho que ha ocurrido el pasado mes de julio al cruzar el sistema de embalses la barrera hasta el nivel 3. El nivel 4, fijado en 400 hm³, cierra el grifo directamente: en este punto, el poco agua queda en los embalses es sólo para el sistema del Tajo.

Un fleco en esta regla nutre la polémica de este verano: el memorándum preveía un periodo transitorio de cinco años, hasta 2018, durante el que el mínimo no trasvasable iría en aumento proporcionalmente año a año hasta alcanzar los 400 hm³. Hoy, con los embalses ya por debajo de esta cifra, seguimos en nivel 3 debido a esta norma. «Si estuviéramos en 2018, ya se podría cancelar el trasvase. Pero estamos en 2015», apunta el jurista del **Instituto del Agua**.

Para **Elena de la Cruz, consejera manchega de Fomento**, este proceso era un truco para beneficiar a Murcia y la Comunidad Valenciana en detrimento de su comunidad. Para el actual gobierno de Castilla La Mancha, la «pax» del memorándum fue un cierre en falso de la guerra del agua que no satisface ni de lejos las reclamaciones de la cuenca cedente. Piden más participación de la autonomía en la regulación del río y han recurrido el trasvase discrecional de julio, poniendo en cuestión hasta la versión ministerial del nivel actual de reservas. La consejera habla de una «lucha con uñas y dientes» para reducir el trasvase y de usar «todos los mecanismos legales».

Guerra de números

Pese a que muchos expertos en materia hídrica, sobre todo vinculados a la **Fundación Nueva Cultura del Agua**, piden la cancelación del trasvase, el apoyo académico y social con el que cuenta la infraestructura es quizá mayor que las críticas. En cualquier caso, son muchas las opiniones que piden un sistema «equilibrado y sin maximalismos» en ambas cuencas, elaborado por el Estado con criterios técnicos y que prevea un «mix» de recursos hídricos donde cuenten tanto el trasvase como la desalinización, como opina **el economista agrario Javier Calatrava, de la Politécnica de Cartagena**. Opina que el debate es una cuestión con base -«el Tajo se ha deteriorado en estas décadas»- inflamada por cuestiones políticas y en el que «curiosamente» los que menos rechazo muestran al acueducto son «los regantes y la población rural» manchega.

Atacar el trasvase es también afrontar unas poderosas evidencias numéricas. Las 237.000 hectáreas (ha) de la superficie regable de toda la cuenca del Tajo tienen un retorno para el agricultor cuatro veces menor que las 147.276 ha de la parte alicantino-murciana, según Calatrava. Además, el trasvase genera 110.000 puestos de trabajo directos e indirectos, con una aportación agregada al PIB nacional de 2.364 millones de euros, según un informe de la consultora Price Waterhouse Cooper de 2013. Cada ha tiene una inversión de 6.000 euros en tecnología hídrica, según un informe del Instituto del Agua de la UA, que suma junto a otros conceptos un valor patrimonial de 21.000 millones de euros, según el Instituto, que cabría reclamar al Estado si se cancela el trasvase. Además, el Levante **ha pagado casi el 60% del coste de la infraestructura**, unos 430 millones de euros hasta el pasado ejercicio, según la memoria 2014 del **Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura**.

Es una infraestructura asediada, pero sólida en sus bases jurídicas y económicas.